

## **EL ROMPECABEZAS LATINOAMERICANO**

**José Ángel Sotillo Lorenzo**

Profesor de Relaciones Internacionales  
Universidad Complutense de Madrid

Desde hace un tiempo se ha abierto el debate acerca de si América Latina vive una época de cambios o un cambio de época.

Sin duda alguna, en las últimas décadas América Latina ha vivido acontecimientos y situaciones que implican cambios muy importantes en la región. Para hablar de cambio de época —“período de tiempo que se distingue por los hechos históricos en él acaecidos y por sus formas de vida”, según el Diccionario— es necesario que el tiempo corrobore que ciertas tendencias se conviertan en estructurales.

Lo que sí parece constatarse es un mayor grado de autonomía en la gestión de sus asuntos y una mayor presencia internacional. A esa situación ha conducido una serie de hechos como la consolidación de la democracia en la región, la estabilización y el crecimiento económico y un mayor dinamismo en las relaciones exteriores, con un grado mucho mayor de apertura (desde la Unión Europea hasta Irán). A partir de esas observaciones generales, conviene recordar que hablamos de una región que tiene muchos vínculos en común, pero que a su vez sigue desgajada en bastantes piezas; que pone en marcha mecanismos de cooperación regional, que a su vez conviven con escenarios de tensión y crisis vecinales. Una región, en definitiva, cuyas partes todavía no suman un todo, y que combina elementos de homogeneidad con otros de heterogeneidad, con formas de cooperación que conviven con tensiones, crisis y conflictos.

A todo ello hay que añadir un elemento clave como son las relaciones con Estados Unidos, que viven también su propio momento de cambio tras el fin de la presidencia de George W. Bush y la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama.

Tomemos en consideración también que, dada la interdependencia del sistema internacional en el que vivimos, hechos que antes se establecerían como acontecimientos internos, acotados al interior de la frontera de un país, hoy adquieren connotaciones regionales y, en algunos casos, globales.

Un telón de fondo común es la puesta en cuestión de las instituciones que sustentan tradicionalmente al Estado y que hoy, al menos, se ven cuestionadas en buena parte de América Latina. De ahí que la inestabilidad política sea pauta común en muchos países; tampoco hace falta ir a América Latina para comprobar inestabilidades. Aunque este fenómeno se percibe siempre como negativo, es necesario reflexionar sobre las causas profundas que lo motivan y el carácter rupturista de actores que son extraños a ese modelo tradicional de Estado que llevó al otro lado del Atlántico la colonización de España y Portugal. Actores sociales de la más diversa composición o el protagonismo de los pueblos indígenas son dos de los principales elementos que rompen con el corsé del Estado. A ello hay que añadir todo un proceso de cambio político que tiene uno de sus debates más profundos en la cuestión de la reelección presidencial.

Un claro ejemplo de esta complejidad es el caso de Bolivia<sup>1</sup> que, además, tiene que hacer frente a las demandas de mayor autonomía por parte de los Departamentos más ricos. Los pensadores clásicos no darían crédito ante un ente político cuya Constitución define como Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Muestra de la diversidad boliviana es que el castellano es idioma oficial junto a otros 36 idiomas, de los pueblos indígenas originario campesinos.

Examinemos dos piezas de ese rompecabezas latinoamericano. La crisis en Honduras y el caso de Colombia, enmarcados ambos en qué tipo de relaciones interamericanas se están fraguando hacia el futuro.

---

<sup>1</sup> Véase el artículo publicado en *Nombres Propios*, de la Fundación Carolina, por José María Tortosa, “Sumak kawsay, suma tamaña, buen vivir”.

Hay que subrayar, en primer lugar, que el golpe de Estado en Honduras rompe el escenario de normalidad democrática instalada en la región. El 28 de junio de 2009, los militares hondureños sacaban de su residencia y expulsaban del país al presidente Manuel Zelaya Rosales. El argumento: el presidente se extralimitaba con respecto a los poderes que le otorga la Constitución, busca la reelección y, sobre todo, forma parte de la órbita chavista. No deja de ser sorprendente que, visto este caso desde España, bastantes medios de comunicación y una parte de los expertos latinoamericanistas se dedicaran a explicar estas causas y no al hecho en sí de un golpe de Estado contra un presidente democráticamente elegido. Cualquier cosa menos alguien cercano al presidente de Venezuela y su expansionismo bolivarchavista.

Tomemos como ejemplo el artículo del escritor Jorge Edwards, titulado “La guerra fría reiventada”<sup>2</sup>: “Ahora, desde la instalación y la extensión del ALBA, la alianza bolivariana encabezada por Hugo Chávez, y frente a los sucesos recientes de Honduras, comprobamos que una guerra fría en menor escala, con otras condiciones y hasta con otros lenguajes, podría prosperar en nuestro mundo, para desgracia de todos o de casi todos ... El caudillo caraqueño mueve sus peones y las piezas van cayendo: Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras ... Es por eso que los hondureños de los sectores más diversos —Ejecutivo, Parlamento, Poder Judicial, Iglesia, Ejército, empresario—, se defienden como gatos de espalda de la vuelta a la presidencia de Manuel Zelaya”. En ningún momento se condena el golpe de Estado, mientras se achaca la culpa de la situación —de esa y de otras— a superman Chávez, y el autor descuida algún que otro colectivo en cuanto a los sectores que apoyan al presidente de hecho. Es más, ¿se puede sostener que quienes gobiernan en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y en Honduras hasta el 28 de junio no han sido elegidos democráticamente?

Sin embargo, la condena internacional ha sido unánime, incluyendo a la Casa Blanca. Quedan atrás los tiempos en los que el inquilino de esa residencia (George W. Bush) avalaba, con la connivencia de otros Gobiernos (como el de Aznar), el golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez, el 11 de abril de 2002, recalifi-

---

<sup>2</sup> Publicado en *El País*, el 30 de julio de 2009.

cado como cambio institucional, apoyando al Gobierno de hecho de Pedro Carmona. También aquí alguna prensa trató el asunto como un hecho derivado de las protestas que condujeron a la dimisión de Chávez, alabando la trayectoria de Carmona como empresario.

El golpe de Estado en Honduras lo ha condenado la Organización de Estados Americanos (OEA), institución que durante buena parte de su historia sirvió al hegemónismo panamericano de Washington, pero en la que también soplan vientos de cambio. El 3 de junio la Asamblea General dejaba sin efecto su decisión de 31 de enero de 1962 de excluir a Cuba del sistema interamericano.

La OEA suspendió, el 4 de julio, el derecho de Honduras de participar en la organización, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana. Su secretario general, José Miguel Insulza, viajó a ese país el 4 de julio, con el fin de convencer, sin mucho éxito, al Gobierno de hecho del retorno al régimen democrático.

Otras instancias que han condenado el golpe de Estado han sido: el Grupo de Río, en su reunión de líderes en Managua, bajo la presidencia de Felipe Calderón (29 de junio); la presidencia pro t mpore de la Comunidad Andina (30 de junio); los Estados parte del Mercosur y Estados asociados (24 de julio).

En la Cumbre Trinacional Canadá–Estados Unidos– México (Guadalajara, 9 y 10 de agosto), los presidentes Harper, Obama y Calderón también condenaron la situación en Honduras, aprovechando Obama para calificar de "hipocresía a quienes se quejan de que EE.UU. no ha intervenido lo suficiente para restablecer a Zelaya en el poder y después piden que los yanquis se salgan de América Latina". El cinismo no es la mejor arma para luchar contra la hipocresía.

También han mostrado su respaldo al presidente Zelaya la inmensa mayoría de los dirigentes americanos, con los que Zelaya se ha entrevistado —desde la secretaria de Estado Hillary Clinton hasta el presidente Lula—, que han reclamado el inmediato retorno a su puesto.

Así lo ha hecho el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el 29 de junio, y la Declaración de Guanacaste (Costa Rica), de 29 de julio, de la XI Cumbre de

Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y de Concertación de Tuxtla.

Hay un respaldo generalizado al Acuerdo de San José para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras (22 de julio), logrado con la mediación de Óscar Arias, que incluye medidas que implican el retorno de José Manuel Zelaya Rosales a la Presidencia de la República hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010. Incluye también la creación de un Gobierno de unidad y reconciliación nacional, encabezado por Zelaya, el adelanto de las elecciones, una amnistía para los delitos políticos y una comisión de la verdad y otra de verificación.

La cuestión está en cómo se producirá el retorno a la institucionalidad democrática si el Gobierno de hecho se niega a aceptar el regreso a su cargo del presidente Zelaya, hasta donde está dispuesto éste a ceder para recuperar su puesto y cuáles son los medios de presión que deben ser activados por la comunidad internacional para hacer frente a casos como este.

Vayamos al caso colombiano. A juicio de quien esto escribe el presidente Álvaro Uribe aparta a Colombia del multilateralismo y las opciones regionales, para priorizar las relaciones con Estados Unidos. Este hecho no es nuevo, ni mucho menos, pero se produce en unos momentos de suramericanización, de un creciente protagonismo de Brasil y del alejamiento de muchos Gobiernos suramericanos de Washington. En el otro lado de la balanza, Estados Unidos cuenta con la alianza de los gobiernos de México, Perú y, muy especialmente, Colombia.

A Estados Unidos, sea cual sea su presidente, le interesa mantener esa alianza privilegiada con Colombia, máxime cuando las relaciones con otros Gobiernos suramericanos no pasan por su mejor momento. Es una manera de mantener el control sobre el espacio americano, con la justificación de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero también ante la cada vez más frecuente presencia de actores que, hasta hace poco tiempo, tenían su presencia vetada (China, India o Irán), pero también ante el aumento de la presencia militar rusa en buena parte del Planeta.

Esa recomposición de la presencia de Estados Unidos la vemos en distintas formas. El nuevo discurso político hacia sus vecinos americanos lo presentó Obama en la Quinta Cumbre de las Américas (Puerto España, Trinidad y Tobago, 17 a 19 de abril), incluyendo nuevas medidas hacia Cuba, basado en el respeto mutuo, los intereses comunes y los valores compartidos. En el escenario económico, la administración Obama tiene que reconducir los acuerdos comerciales pendientes ¿quién se acuerda ya del ALCA? En el terreno geoestratégico, tiene que reforzar su presencia militar, con el argumento de la lucha contra los nuevos enemigos (terrorismo y narcotráfico), escenarios que encuentran su lugar idóneo en México y en Colombia; pero además, recordemos que el 25 de abril de 2008 se anunciaba la reactivación de la IV Flota, con las Fuerzas Especiales SEAL (Sea, Air, Land), que comenzaba a patrullar el 1 de julio de ese año, mientras que los militares estadounidenses abandonaban, el 11 de julio de 2009, la base ecuatoriana de Manta.

En este contexto encontramos el porqué del aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Colombia, más allá de la que ya hay por medio del Plan Colombia. En este caso la cuestión está en si el fin justifica los medios o si hay límites en la actuación de un Gobierno para hacer frente a grupos terroristas, tal como se redefinió a los grupos guerrilleros a partir del 11 de septiembre de 2001. Aplicando la primera opción, el Ejército colombiano atacó, el 1 de marzo de 2008, a miembros de las FARC que estaban dos kilómetros adentro de Ecuador; en esa operación murió el comandante Raúl Reyes, encargado de relaciones internacionales de las FARC. El presidente Rafael Correa rompió relaciones con Colombia. Junto a la gravedad del suceso, éste revela la regionalización e internacionalización del conflicto colombiano.

A mayor tensión con sus vecinos, Uribe viene intensificando las relaciones con Estados Unidos. El acuerdo, anunciado el 15 de julio, permitirá a Estados Unidos el acceso a siete bases (tres de la Fuerza Aérea, dos de la Marina y dos del Ejército); a su vez, Estados Unidos invertirá 32 millones de euros para modernizar las instalaciones y mejorar su operatividad. Desde la base de Palanquero, un avión C-17 puede cubrir casi

la mitad del continente sin reabastecer combustible. La presencia de militares estadounidenses está limitada a 800 militares y 600 contratistas.

Las dos partes confirmaron el cierre del acuerdo el 16 de agosto. Para la secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, “es un acuerdo bilateral con un reconocimiento muy claro de la soberanía y la integridad territoriales”, sin que afecte a los vecinos de Colombia; así lo manifestó tras reunirse en Washington, el día 18, con su homólogo colombiano Jaime Bermúdez. Tras rechazar esa argumentación, el presidente Chávez fustigó de nuevo “¿Qué, nos chupamos el dedo aquí?”.

Para explicar cómo no afecta a sus vecinos, el presidente Uribe los visitó. Bueno, no a todos. En una gira express, se reunió con los presidentes de siete países suramericanos en sólo tres días: Alan García (Perú), Michelle Bachelet (Chile), Fernando Lugo (Paraguay), Cristina Fernández (Argentina), Evo Morales (Bolivia), Tabaré Vázquez (Uruguay) y Lula da Silva (Brasil). En ella cosechó el beneplácito del presidente peruano y, desde el respeto a una decisión soberana, las distancias cuando no las críticas del resto. A pesar de la petición de Hugo Chávez, la cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur (Quito, 11 de agosto), no tocó el polémico tema, dejándolo para una reunión extraordinaria a celebrar en Bariloche el 28 de agosto, a la que sí se ha comprometido a asistir el presidente Uribe.

Más allá de las implicaciones militares, la decisión de Uribe pone en cuestión los esfuerzos por regionalizar los ámbitos de la cooperación política suramericana por medio de Unasur y, aún más, el papel del Consejo de Defensa Suramericano (creado en la I Cumbre de Defensa de Unasur, Santiago de Chile, 10 de marzo de 2009) y, por ende, los esfuerzos de Brasil por liderar una mayor autonomía suramericana.

En Santiago de Chile, los 12 miembros de Unasur se comprometían a “consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como contribución a la paz mundial”.

La decisión de Uribe tuvo un apoyo externo, el que le transmitió la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, tras su entrevista el 7 de agosto: “el acuerdo es útil para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico”. Una semana antes, desde

Brasil, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, manifestaba su preocupación por la escala de tensión en la zona.

Un elemento a añadir en esta escalada de la tensión es el aumento generalizado que los países latinoamericanos vienen realizando en la compra de armamento, un hecho absolutamente legítimo pero que choca brutalmente con una región donde sigue abundando la pobreza. Un dato bastante elocuente: según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el gasto en armamento en la región aumentó en un 91% entre 2003 (24.700 millones de dólares) y 2008 (47.200 millones de dólares).

No todo es tensión y tambores de guerra: Bolivia sigue negociando, paso a paso, con Chile las históricas reivindicaciones sobre la salida al mar.

En pleno proceso reivindicativo de celebración de los bicentenarios, América Latina es dueña de su propio destino como, quizá, no lo ha sido hasta ahora.

Puebla de Sanabria, 24 de agosto de 2009